

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Folio: UT-204/2024

ASUNTO: Respuesta a solicitud 100177400009624

C. victir joel martinez martinez
P R E S E N T E

En relación a la solicitud de información recibida en esta Unidad de Transparencia, a la cual se le asignó el número de folio 100177400009624, donde textualmente dice:

"solicito la informacion que se tenga referente a procedimientos abierto, cerrados y/o archivados de Christian Alberto Medina Martinez en un lapso de 10 años." (SIC)

Encontrándome dentro del término que para tal efecto me fuera concedido y con la finalidad de privilegiar en todo momento el derecho humano de los ciudadanos de tener acceso a la información pública, Me permito comunicarle que el artículo 6 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, asimismo, el artículo 16 de la Carta Magna, dispone que todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros; por lo que esta Autoridad considera que lo descrito anteriormente es una garantía de cualquier persona, independientemente del carácter de su ocupación, es decir, si se encuentra o no, activo en el Servicio Público.

En ese sentido, se considera que proporcionar información de la existencia o inexistencia de cualquier procedimiento en contra de una persona identificable, puede afectar su honor, buen nombre, su imagen e incluso su presunción de inocencia.

Y que en atención al siguiente criterio:

Registro digital: 2021902

Instancia: Plenos de Circuito

Décima Época

Materia(s): Administrativa

Tesis: PC.I.A. J/159 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5530

Tipo: Jurisprudencia

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. AL CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA CONSIDERARLO PARTE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, POR LO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE



EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO AL ERARIO RECAE EN LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.

En la jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador resulta válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, siempre y cuando resulten compatibles con su naturaleza. En esa medida, el procedimiento administrativo resarcitorio previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, vigente hasta el 18 de julio de 2016, cumple con los requisitos para considerarlo parte del derecho administrativo sancionador, pues su finalidad es sancionar las irregularidades o faltas causadas por actuaciones de servidores públicos, e incluso particulares, que vulneren el uso honesto y transparente del erario público, con el objeto de obtener la indemnización por los daños y perjuicios causados, mediante el pago que se determine en el pliego definitivo de responsabilidades. Además, tiene un fin represivo o retributivo que se ejerce como una manifestación de la potestad punitiva del Estado, ya que la indemnización que se condene a pagar al probable responsable deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios, o ambos, causados por la conducta considerada administrativamente ilícita, más su actualización en términos del Código Fiscal de la Federación. Finalmente, atendiendo al principio de presunción de inocencia, la carga de la prueba sobre el daño o perjuicio causado al erario público recae en la autoridad fiscalizadora, teniendo la obligación de presentar las pruebas que acrediten la existencia de la responsabilidad del probable responsable, lo que implica que este último no está obligado a probar su inocencia, derivado de que tiene reconocida tal calidad a priori.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Resulta pertinente traer a cuenta lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cita:

"Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

[...]

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; [...]"

Así pues, hablando de la presunción de inocencia y aplicando las normas relativas así como los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, este Sujeto Obligado, cree pertinente transcribir a siguiente jurisprudencia:

Registro digital: 2006092
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497

Tipo: Jurisprudencia

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.

La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.

Por su parte, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se prevé:

"Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques"

Asimismo en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, específicamente en su artículo 11, se establece:

"Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad

1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad

2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

Y finalmente, de manera coincidente en el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se señala lo que a continuación se cita:

"Artículo 17.-

1.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2.- *Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques."*

Es de suma importancia mencionar que, de todo lo anteriormente escrito se tiene que el derecho mexicano y los tratados internacionales de los que México es parte establecen que a menos que se declare la culpabilidad, o bien, responsabilidad administrativa por virtud de una resolución o sentencia sancionatoria correspondiente, proporcionar información, como en la presente solicitud es la existencia de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de Christian Alberto Medina Martínez, resulta inadecuado ya que al referirnos de manera directa e identificada a una persona física, la divulgación de información representaría un riesgo significativo del cuidado especial en la honra y reputación de Christian Alberto Medina Martínez, y puesto que, conforme a lo expuesto en líneas precedentes, el derecho a su intimidad, constituye un derecho fundamental en cuanto al no ser conocidos en ciertos aspectos de su vida y el poder de decisión sobre la publicidad de datos relativos a su persona y desarrollo de la misma, y lo que es más, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás, en términos de la siguiente tesis:

Registro digital: 165821

Instancia: Pleno

Novena Época

Materia(s): Civil, Constitucional

Tesis: P. LXVII/2009

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 7

Tipo: Aislada

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.

Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su

psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.

A fin de abundar, resulta adecuado traer a cuenta la definición de honor ¹establecida por el Diccionario de la Real Academia Española, donde se puntualiza como 1. Cualidad moral, 2. Gloria o buena reputación y 3. Dignidad , y que es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de la expresión de su propia imagen. Por consiguiente, el derecho a su intimidad, es un derecho humano que involucra el tratamiento de forma decorosa de cada individuo.

En ese sentido, en atención a la Resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dentro del expediente RRA 7446/17, se estima que cualquier pronunciamiento que dé cuenta de la existencia o no, de procedimientos en contra de una persona identificable, más si no existe resolución o sentencia que imponga una sanción en su contra, puede afectar su honor, buen nombre, imagen e incluso presunción de inocencia, toda vez que, afecta la esfera privada que podría generar una percepción negativa sobre Christian Alberto Medina Martínez.

De las normas constitucionales, como lo son el artículo 6 apartado A fracción II y 16, que establecen:

“Artículo 6o.- [...]

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[...]

II.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. [...], y

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que

¹ Definición **“Honor”** Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española
<https://www.rae.es/drae2001/honor>


funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. [...]"

Se concluye que, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

En virtud de lo anterior, se da respuesta en tiempo y forma a lo solicitado, esperando haber atendido de manera satisfactoria su solicitud de información, le comunico que en caso de no estar conforme con la respuesta otorgada, podrá interponer un Recurso de Revisión de manera directa ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, sitio en calle Negrete 807 Oriente, antes de Libertad, Zona Centro, teléfonos: (618) 811 77 12, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente escrito; en la Plataforma Nacional o bien, al correo electrónico www.idaip.org.mx o ante la Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contraloría, sito en Pino Suárez No. 1000 pte., teléfonos: (618) 137 7218, en términos de los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

ATENTAMENTE
VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 7 DE NOVIEMBRE DE 2024



L.C. y T.C. MARÍA OLIVIA TRUJILLO BAYONA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

c.c.p. Martha Hurtado Hernández.- Coordinadora General de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Durango